

Crónica del mes Mayo-junio - 2006

Los hechos acontecidos en lo político, social y económico durante los meses de mayo y junio son una muestra de la complicada situación sociopolítica que atraviesa el país. Los fracasos de las políticas gubernamentales de seguridad pública, que se verifican en el elevado número de muertes diarias, el segundo año de gestión presidencial, las protestas en contra del gobierno, la situación crítica del sistema de salud, que se vio agravada con la eliminación de las cuotas voluntarias, así como el aumento del costo de la vida por el alza en productos y servicios, fueron sucesos que desvirtúan la publicidad gubernamental.

Política

El mes de mayo inició con la habitual conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, una oportunidad en la que los sectores sociales han aprovechado para manifestar sus demandas y repudiar las iniciativas gubernamentales. También el FMLN, principal partido político opositor, aprovecha para “acompañar” las marchas. Desde días antes se esperaba una participación masiva de salvadoreños a las marchas, así como el “acompañamiento” de dirigentes y funcionarios efemenistas. Previendo este escenario, con clara intención de infundir temor entre los futuros asistentes a las actividades del 1° de mayo, el Ejecutivo salvadoreño, a través del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, desplegó en la radio, televisión y prensa escrita un comunicado mediante el cual hacía un llamado a respetar las normas legales, caso contrario, atenerse a las consecuencias, ya que la PNC tiene instrucciones de actuar aplicando todo el rigor de la ley”. Resaltan en el comunicado las palabras “terrorismo”, “desórdenes públicos” y “FMLN”, con el fin de relacionar a los participantes con esas palabras, es decir, dando el mensaje que quienes se manifiestan únicamente son del FMLN, hacen desórdenes públicos y son terroristas. No obstante las advertencias, las

diferentes marchas y actividades alusivas se nutrieron de miles de personas, entre trabajadores formales e informales, estudiantes, empleados públicos, campesinos y los 3 mil policías y 500 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) que las acompañaron. No se reportaron incidentes graves, aunque se dieron algunas acciones de pega, pinta y daño a la propiedad privada.

Ese mismo día, mientras miles de salvadoreños se manifestaban en San Salvador, los nuevos 84 diputados asumían el poder durante una larga jornada que presagiaba la escasez de espacios de entendimiento entre las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. De esto sobran muestras al término de la legislatura anterior. Y es que el último día de abril, durante la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa vigente entre 2003 y abril de 2006, Agustín García Calderón fue reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tercer período consecutivo, pero sin los votos del FMLN. Los diputados de ARENA corrían para lograr el apoyo de una serie de mociones de interés para el Ejecutivo, pero, en todo caso, quedaron pendientes temas como la aprobación de préstamos internacionales; el alargue de los períodos municipales y legislativos, de 3 a 5 años; las escuchas telefónicas; y la creación de un instituto para la investigación y prevención del delito.

La mayoría de las cuestiones pendientes necesitan de una mayoría calificada, es decir, 56 votos, para ser aprobados en la legislatura entrante, que se inauguró el 1° de mayo, quedando conformada de la siguiente manera: 34 diputados de ARENA, 32 del FMLN, 10 del PCN, 6 del PDC, y 2 del CD. Así, pues, el escenario que se inauguró en el Parlamento es el siguiente: los partidos mayoritarios consiguen mayoría simple si se unen con los minoritarios; ninguno de los dos grandes consiguen la mayoría calificada (56 votos) por sí mismos. El veto no será posible para la oposición, pues tiene 52 de los 56 votos que se requieren para ello.

Aunque la toma de posesión estaba programada para la mañana de ese día, hubo

que esperar cerca de once horas para que quedara conformada la nueva junta directiva, que quedó de la siguiente manera: la presidencia para Rubén Orellana (PCN); las vicepresidencias para Rolando Alvarenga (ARENA), Rafael Machuca (PCN), Roberto Lorenzana (FMLN) y Rodolfo Parker (PDC); y, finalmente, las secretarías quedarían en poder de Gerson Martínez (FMLN), Antonio Al-mendáriz (PCN), Enrique Valdez (ARENA) y Zoila Quijada (FMLN). Destaca de esta nueva junta directiva la creación de una vicepresidencia más para asignársela a Rodolfo Parker. En opinión del diputado de Cambio Democrático, Héctor Dada Hirezi, esta junta “no responde a la proporcionalidad necesaria para orientar el trabajo de la Asamblea”.

La nueva legislatura demoró en asumir el ritmo de trabajo necesario en el Parlamento y no fue noticia sino hasta finales del mes. Así, en la edición de *La Prensa Gráfica* del 24 de mayo resalta en primera plana: “Plazas de \$5 mil para ex diputados”. Ciro Cruz Zepeda, ex legislador del PCN; Manuel Melgar, ex diputado del FMLN; y otra plaza que no se dio a conocer por parte de ARENA, recibirían en conjunto 14 mil dólares al mes por el cargo de asesores de alto nivel en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con una investigación de ese medio de prensa. Las plazas para ARENA y el FMLN serían de 4 500 dólares cada uno, mientras que para el PCN sería de 5 500 dólares, mientras se declara austeridad en otras dependencias estatales y prevalece la escasez en seguridad pública, salud y educación, entre otras. Se trata de cantidades que sobrepasan incluso los salarios de los diputados y otros funcionarios públicos de alto rango.

El 1° de mayo, además, asumieron sus cargos los nuevos 262 alcaldes y concejos municipales que fungirán hasta el año 2009. Violeta Menjívar, primera alcaldesa de la ciudad de San Salvador, en una entrevista realizada por *La Prensa Gráfica*, afirmaba que su futuro no será como el de sus últimos dos predecesores (quienes fueron elegidos como candidatos del FMLN y han terminado su período fuere de este): “no veo en el

horizonte que esta alcaldesa tenga necesidad de romper con el partido” afirmó. Aseguró, además, que la autonomía de su gestión no es absoluta, aceptando que su partido tendrá alguna injerencia. Sin embargo, dijo, esto no implicaría mayor obstáculo para que pudiera negociar con el Ejecutivo temas de interés público. En la primera reunión del nuevo concejo capitalino se acordó la rebaja de sus dietas por asistir a las sesiones en un 20 por ciento.

El primer día del mes marcó, de este modo, la inauguración de un escenario de mayor polarización política y social. Política, porque la conformación del nuevo ejercicio legislativo deja a ninguna fuerza política sin mayoría, lo que anuncia acaloradas discusiones en el seno del Parlamento. La fracción del FMLN ya había mostrado su negativa a plegarse a las mociones de la fracción arenera, dócil a los lineamientos del Ejecutivo; así, este último no tendrá el mismo margen de maniobra para imponer su ritmo en la Asamblea. Polarización social, pues luego de finalizados los pasados comicios de marzo ha quedado más clara la inconformidad de muchos sectores sociales ante las sucesivas iniciativas gubernamentales y el incumplimiento de las promesas electorales por parte de Antonio Saca, por más que este último insista en asegurarlas. A partir de mayo, pues, con las convocatorias de los diferentes movimientos sociales y los altos índices de violencia, se anuncia un periodo de mayor efervescencia social. Mientras tanto, la clase política seguía su ritmo, a veces contracorriente con la sociedad.

En el Ejecutivo, por ejemplo, se ratificaban algunos cambios de mando movidos por diversas motivaciones, aunque pueda leerse cierta inconformidad con los servicios prestados en las instituciones involucradas. Es el caso de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), cuya nueva presidencia fuera ratificada el 4 de mayo con la titularidad de César Funes, quien viene de dirigir la Secretaría de la Juventud. Ese mismo día también se ratificó el cambio en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde asumió la dirección Nelson Nolasco, quien

antes fungía como subdirector. Finalmente, el presidente Saca informó ese mismo día del cambio en la presidencia del Consejo Superior de Salud Pública, que ocupará desde el 1° de julio Lilian Avedaño, quien había trabajado desde hace 2 años en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Hay que decir, no obstante, que tanto ANDA como el ISSS se encuentran en serios problemas que no se solucionarían con el cambio de sus respectivas presidencias, sino cambiando radicalmente su forma de funcionar, haciendo frente a la corrupción y poniendo sus servicios al servicio de las mayorías empobrecidas.

El 11, en una entrevista realizada por *La Prensa Gráfica*, el nuevo director del ISSS, Nelson Nolasco, confesó su afiliación al partido ARENA, pero consideró que su elección se debe, más que por su afiliación partidaria, a su capacidad y tiempo dedicado al Seguro Social. Jorge Mariano Pinto, antecesor de Nolasco, salió de la institución después que la Corte de Cuentas encontró en una investigación una serie de contratos ilícitos. El nuevo director, a pesar de haber fungido como subdirector durante la gestión de Pinto, dijo no sentirse afectado por los señalamientos de la Corte de Cuentas: “por ser parte de la administración claro que debo entender ese señalamiento, pero es la Corte de Cuentas la que lo va a dilucidar” afirmó.

En esa misma línea, el día 15, el encargado de aplicar la Ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Cáceres, que se le recuerda por haber detectado el enriquecimiento ilícito de Carlos Perla, ex presidente de ANDA, renunció a su cargo de jefe de la sección de Probidad de la CSJ. “Ya no tengo nada más que hacer aquí”, dijo Cáceres a su salida, luego de que a dicha sección le fuera retirada la potestad de indagar la probidad de los funcionarios públicos y dejarla a discreción de los magistrados de la Corte. Días después, el 30 de mayo, los magistrados que investigaban a algunos funcionarios que fungieron durante el gobierno de Francisco Flores afirmaron que no encontraron indicios

de enriquecimiento ilícito en ellos; por tanto, concluyeron, la investigación no procedería más.

Por otro lado, el 20, fue conformada la junta directiva de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). La junta quedó integrada por miembros del partido ARENA, PCN y PDC. Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, de ARENA, fungirá como la nueva presidenta. Por su parte, representantes del FMLN aseguraron que se buscó negociar con el COENA, máximo organismo de dirección del partido oficial, para integrar una junta directiva pluralista, pero se les negó el diálogo y, como resultado, ningún alcalde o alcaldesa del partido de izquierda conformó dicho organismo directivo. “En las previas negociaciones tuvimos la respuesta clara del COENA, que nos dijo que estábamos excluidos”, afirmó Violeta Menjívar, alcaldesa de San Salvador. El presidente Antonio Saca comentó al respecto que “los alcaldes se pusieron de acuerdo y decidieron sus representantes. Ahí aplicaron la fórmula democrática”. No obstante, según los estatutos de COMURES, la representatividad en la junta directiva es conforme con el total de votos obtenidos por cada partido y por la cantidad de alcaldías ganadas.

En el ámbito municipal, pues, también quedaba al descubierto la polarización de la que se ha venido escribiendo líneas arriba. Días después, el problema de la recolección de la basura en la ciudad de San Salvador se hizo patente, pues, hasta el 26 de mayo, se contabilizaban alrededor de 461 toneladas de basura sin recolectar en las decenas de botaderos al aire libre. De acuerdo con notas de prensa, desde hace unos veinte días el camión recolector de basura no pasaba, debido al mal estado de la mayor parte de las unidades de recolección de la alcaldía capitalina. La alcaldesa se comprometió con la compra de 25 nuevas unidades con fondos provenientes del presupuesto general y créditos bancarios.

El 29, aprovechando la crisis de la recolección de basura en San Salvador, el Ejecutivo ofreció ayuda a través del Ministerio de

Obras Públicas. “No vamos a responder al ofrecimiento porque estamos ya resolviendo el problema. Si el problema no se resuelve, podremos llamarle al presidente. Yo no tendría ningún inconveniente con ello”, manifestó Violeta Menjívar, aceptando empero que “ahora están funcionando menos de 14 (unidades recolectoras de basura), cuando en tiempo normal la flota es de cuarenta y tres”. Al día siguiente, después de días de incertidumbre sobre la recolección de la basura en la capital, Menjívar aseguró que dicho problema ya se estaba solucionando. Con respecto a la ayuda del Ejecutivo comentó que “la oferta llega cuando nosotros tenemos treinta unidades en función, pero no la despreciamos porque es buena”. De hecho, durante tres días, veintidós camiones recolectores con 120 obreros del Ejecutivo prestaron el servicio de recolección de los desechos sólidos esparcidos por varias localidades de la capital.

Finalmente, hay que reseñar en mayo otro proceso de claras implicaciones políticas: las negociaciones en el seno de la Universidad de El Salvador en torno a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) orientado a la modernización de la máxima casa de estudios del país. El 21 de mayo, a través de una “carta abierta”, diferentes personalidades públicas nacionales e internacionales —entre las que destacan Rafael Bejar (sociólogo), Narciso Castillo (periodista), Benjamín Cuéllar (director del IDHUCA), Jorge Dalton (cineasta), Héctor Dada (economista), Eduardo Galeano (escritor, doctor *honoris causa* de la UES), Anabella Hándal (bióloga), Carlos Henríquez Consalvi (director del MUPI), Federico Hernández (presidente de CONCULTURA), Miguel Huevo Mixco (escritor), Patricia Iraheta (directora de la ONG Las Dignas), Mauricio Loucel (rector de la UTEC), Román Mayorga (economista, ex rector de la UCA de San Salvador y representante del BID en Venezuela), Violeta Menjívar (médica, alcaldesa de San Salvador), Daryl Meza (ministra de Educación), Roberto Murray Meza (empresario), Roberto Rubio (economista, director de la ONG FUNDE),

Salvador Samayoa (filósofo, ex ministro de Educación), Héctor Silva (médico, ex alcalde de San Salvador), Jeannette Urquilla (directora de ORMUSA), José María Tojeira (rector de la UCA de El Salvador), Mons. Ricardo Urioste (presidente de la Fundación Monseñor Romero)— expresaron lo siguiente: “No advertimos razones valederas para rechazar los 25 millones de dólares gestionados ante el gobierno de El Salvador para el inicio del mencionado programa; más bien recomendamos a toda la comunidad universitaria —en particular al Consejo Superior Universitario y a la Asamblea General Universitaria— que apoyen decididamente esta iniciativa de fortalecimiento de la universidad que beneficiará a la sociedad entera (...) La Universidad de El Salvador y su rectora cuentan para ello con el apoyo de la comunidad académica, artística, profesional e intelectual”.

El 25, el Consejo Superior Universitario de la UES tomó la decisión de reformular el proyecto de fortalecimiento de la universidad con “una amplia participación de los sectores” de la misma, según Isabel Rodríguez, rectora de la UES. En la sesión se hicieron presentes grupos de estudiantes a favor y en contra del proyecto. Quedó pendiente definir si el BID fuese o no el patrocinador.

René Martínez, dirigente del Movimiento de Profesionales de la Universidad de El Salvador (MPROUES), declaró que hay “personas que han hecho del préstamo la única reivindicación posible para poder tener protagonismo de cara a las elecciones del próximo año de las autoridades universitarias. Entonces, mantener viva la discusión, específicamente del BID, en tanto organismo financiero internacional, es lo único que les permite tener protagonismo. Los sectores que están discutiendo de manera apasionada en este momento el préstamo no lo están discutiendo para tener mayor claridad al respecto, sino porque es la única bandera de lucha que tienen, no van a cambiar su opinión”, afirmó en una entrevista publicada en la edición del *Co-Latino* del 25 de mayo. Aseguró, además, que lo que se debería discutir seriamente es el programa y no el pa-

trocinador. Paralelamente, el mismo día 25, diferentes asociaciones de la UES, encabezadas por la Asociación de Estudiantes de Medicina “Dr. Emilio Álvarez” (ASEMEA), denunciaron, a través de un comunicado de prensa, que el 19 de mayo un grupo de individuos cubiertos con gorros pasamontañas realizaron ‘un brutal e irracional atentado’ que se produce justo “un día después que la ASEMEA se pronunciara públicamente a favor del programa de fortalecimiento de la UES (con el préstamo del BID). Esto demuestra —se lee seguidamente en el comunicado— el grado de intolerancia y la desesperación de un grupo de individuos”. Dicho pronunciamiento hacía un llamado a la razón y la cordura, al combate de las ideas con ideas, la eliminación de consignas trilladas en el debate y la búsqueda de una mejor universidad a favor del bien común, en referencia a aquellos grupos que, en lugar del diálogo racional, utilizan la fuerza bruta para imponer sus posturas. Cabe mencionar que esta asociación de medicina es considerada de derecha por algunas organizaciones estudiantiles de la UES. El mes de mayo, pues, cerraba con varios frentes que ilustraban los niveles de polarización política que ha caracterizado al país prácticamente desde que se preparaban los comicios legislativos y municipales de marzo pasado. En junio, lógicamente, ocurrirían otros hechos que darían continuidad a este proceso.

Así, el 1° de junio, al culminar los primeros dos años de gestión presidencial, Elías Antonio Saca, desde la Asamblea Legislativa, rindió el acostumbrado informe a la nación. El mensaje —a veces superficial, sin corresponderse con la realidad de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas— abundó en frases propagandistas que no están a la altura de un mandatario, sino de un publicista o demagogo. La realidad es otra: el país unido —que propugna el Ejecutivo— no existe; la desigualdad económica y social dividen al país en una brecha creciente; en el ramo político, no existe entendimiento ni diálogo; por el contrario, lo que sí hay es una polarización que no está llevando por buen rumbo la cosa pública.

Como muestra de la inconformidad social hacia la gestión presidencial hubo diferentes acciones de protesta durante la jornada de ese día. “No es cierto que estemos en un país seguro. Estamos protestando en contra de toda privatización y la situación económica que afecta a las mayorías”, dijo Efraín Arévalo, quien junto a más de un centenar de personas fue desalojado violentamente por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), en un tramo de la autopista hacia Comalapa. Mientras tanto, en San Salvador, dos marchas culminaron frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa, desde donde expresaron su rechazo al gobierno de Antonio Saca. La promesa de campaña del presidente con respecto a las mujeres fue recordada por la llamada “Concertación Feminista Prudencia Ayala” y la “Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida” (Las Dignas), quienes expresaron su descontento por el incumplimiento de la promesa de que “las mujeres ya no estarán solas”. Las manifestantes protestaron por la pésima calidad de vida de muchas mujeres salvadoreñas, así como por los últimos hechos de “feminicidio” (asesinato de mujeres). Por ello, aseguraron, “los hechos nos confirman que el actual gobierno no está dispuesto a impulsar políticas efectivas para erradicar la violencia hacia las mujeres en todas sus formas de expresión”. Hay que decir que Saca, entre otras cosas, prometió hacer de El Salvador el país más seguro de América Latina, pero, a dos años de gestión, las cifras oficiales sobre homicidios cometidos al año lo ubican como el más violento del subcontinente, arriba incluso de Colombia.

Por otro lado, el día 10, se cumplieron doce años del asesinato de Ramón García Prieto, debido a lo cual sus padres le dirigieron una carta que se publicó en *La Prensa Gráfica*. A través de la misma, sus padres expresaron que la violencia social “es fruto de una política oficial irresponsable, tolerante y hasta deliberada. En nuestro caso nos siguen amenazando y atacando, eso tiene una explicación lógica: quienes realizan esos actos son agentes del Estado o sujetos vinculados

a este para hacernos desistir de nuestra lucha por la verdad y la justicia”. El caso ha sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,) para determinar la culpabilidad del Estado salvadoreño al retardar la justicia en el mismo. La carta prosigue que el asesinato fue “una conspiración, generada por un par de individuos en lo alto del poder y con los más bajos instintos”. En la misma línea, el día 26 de junio, la CIDH sesionó en el país para tratar un caso contra el Estado peruano. El evento fue inaugurado por el presidente salvadoreño Antonio Saca, quien no asistió al acto de pedir perdón en el caso de las Hermanas Serrano Cruz por el cual fuera condenado el Estado salvadoreño. La CIDH, con sede en Costa Rica, realizó y realizará sesiones itinerantes en los países miembros, con la finalidad de dar a conocer sus tareas y las formas como se llevan a cabo.

En otro ámbito, el día 13 de junio se llevó a cabo en Casa Presidencial una reunión privada entre el gabinete de seguridad y el presidente Saca, en el marco de la cual se gestaron los cambios en la Policía Nacional Civil (PNC). Pedro González fue removido de su cargo como subdirector de la institución policial y en su lugar ascendió José Luis Tobar, un agente especializado en Chile sobre investigaciones. Dicho cambio anunció un posible viraje en los planes estatales de seguridad pública: de los fracasados planes Mano Dura y Súper Mano Dura se pasa a un nuevo, “el plan maestro de seguridad”. El argumento del director de la PNC, Rodrigo Ávila, es que las pandillas han mutado a “crimen organizado” y que, por ello, el trabajo de la policía será de “inteligencia y de investigación por estructuras”. Con todo, el promedio de más de 10 asesinatos por día durante junio ha terminado por demostrar el fracaso de la política de seguridad impulsada por Antonio Saca.

Sociedad

En lo tocante al ámbito social, hay que iniciar la cobertura del mes de mayo con el tema migratorio; concretamente, un aconteci-

miento que, aunque fuera de las fronteras salvadoreñas, tiene grandes implicaciones nacionales: las marchas y otras actividades realizadas en Estados Unidos por grupos de apoyo a los inmigrantes indocumentados. Así, el día 2 de mayo resaltaban en las principales páginas de los rotativos nacionales las actividades realizadas en territorio estadounidense por quienes apoyan reformas migratorias a favor de los inmigrantes. Las actividades consistieron en un paro laboral, marchas y un boicot al consumo de productos norteamericanos durante todo ese día. En la edición de *La Prensa Gráfica* de ese día se lee que, “más de un millón de inmigrantes faltaron a sus trabajos, no compraron y marcharon por varias ciudades de Estados Unidos ayer para instar al Congreso a buscar una alternativa que permita a los cerca de 12 millones de indocumentados trabajar legalmente y convertirse en ciudadanos estadounidenses”. Al respecto, señala el medio escrito, el presidente George W. Bush afirmó que la gente tiene derecho a expresarse pacíficamente, aunque dijo no ser muy amigo de los boicots.

Las actividades contaron con la participación de cientos de salvadoreños. A su vez, organizaciones antiinmigrantes hicieron lo propio en contra de la petición de leyes migratorias más justas. Fueron más de un millón de manifestantes hispanos en una histórica jornada. La incógnita para los líderes políticos y económicos estadounidenses está planteada: ¿qué sería de Estados Unidos sin la comunidad latina? En ese mismo orden, el día 3 de mayo trascendió que la oficina de Cancillería salvadoreña maneja que 220 mil salvadoreños estarían inscritos en el Programa de Protección Temporal (TPS), elevando a una suma de 2.5 millones de compatriotas, entre legales e indocumentados.

El 15, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, leyó un discurso en el que enunciaba una serie de acciones a realizarse en la frontera con México en contra de los inmigrantes. Se trata de un envío de “hasta 6 mil miembros de la Guardia Nacional (que) serán desplegados en nuestra frontera sur”.

Pero no se trataría de una militarización, sino de un refuerzo a los estados fronterizos para controlar el flujo migratorio, según matizó el mandatario. No obstante, su discurso va en la línea de tratar a quienes emigran al país del norte como criminales. El presidente salvadoreño opinó que su preocupación era “la legalización de nuestra gente” y no tanto el despliegue de la Guardia de Estados Unidos.

Finalmente, el 21 de mayo, los medios periodísticos locales se empeñaron en transmitir como buena noticia y de gran beneficio para los inmigrantes hispanos en Estados Unidos la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de reforma migratoria. El núcleo de la propuesta dicta los siguientes requisitos para que los indocumentados logren su legalización: llevar más de cinco años en Estados Unidos, demostrar conocimiento del idioma inglés, tener trabajo fijo, carecer de antecedentes penales, estar al día con los pagos de impuestos y pagar una “multa” de 2 mil 500 dólares. Además, el otorgamiento de residencias tiene un límite de 650 mil por año. Jorge Cabrera, activista de una asociación pro derechos de inmigrantes de Los Ángeles, señaló los vacíos de la propuesta de ley, pues “no es una ganancia para la comunidad, es inmoral, inhumana y poco realista. Lo único que lograría es hundir más en las sobras a nuestra comunidad”, apuntó.

Siempre en el plano social, la prensa nacional dio seguimiento a algunos sucesos relativos a la salud pública, sobre todo al anuncio de la eliminación de las llamadas cuotas voluntarias. En ese sentido, el día 15, el ministro de Salud, Guillermo Maza, anunció que “las consultas de emergencia no se condicionarán a ninguna posibilidad de cobro. Las consultas externas lo mismo”. Pero como suele suceder, los discursos de los funcionarios no se corresponden con la realidad, pues las llamadas cuotas voluntarias se siguieron cobrando. De acuerdo a una indagación de *La Prensa Gráfica*, “la proyección para 2006 es que entre los 30 hospitales de la red pública se recogerían \$18.2 millones en el rubro de cuotas voluntarias”. Esto significa que para suprimir dichas cuotas, es necesario aumentar

el presupuesto para la cartera de Salud. La medida también abarca a las unidades de salud de todo el país.

El 17, dos días después de haber anunciado la eliminación de las cuotas voluntarias, Maza pidió “creatividad” y “solidaridad” a los hospitales públicos y a los pacientes, respectivamente, al reconocer que no hay manera de rellenar el hueco financiero que deja la eliminación de dichas cuotas. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para El Salvador, a través de Eduardo Guerrero, advirtió que la medida adoptada por Salud es simplemente inviable mientras no se implementen medidas compensatorias. “Una gratuidad universal puede ser peligrosa para la sostenibilidad financiera de un sistema de salud. Trabajo social debe trabajar identificando a las personas que puedan pagar”, matizó Guerrero. El 23, la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPA), a través de su dirigente sindical, Cayetano Castro, reveló su preocupación por el anuncio de la eliminación de las cuotas voluntarias, pues solo en el Hospital Rosales se cubrían con ellas unas 100 plazas, 20 de cuales corresponden a médicos especialistas.

El 31, la Comisión Tripartita del gremio médico, compuesta por el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS, el Colegio Médico de El Salvador y la Asociación Médica Nacional, a través de un campo pagado, aseguró que la Comisión Nacional de Reforma Integral de Salud, con la denominada “Propuesta de organización y funcionamiento del sistema nacional de salud”, no ofrece en realidad una solución integral al problema del sistema de salud salvadoreño, sino más bien apunta a la privatización. Señala, además, que la propuesta no es viable para un “sistema nacional de salud, único, solidario, equitativo, accesible, universal y de excelente calidad”. Expresó, seguidamente, que si la reforma de salud no se acompaña de reformas fiscales, medioambientales, de seguridad social y jurídicas, aquella no será posible. Finalmente exhortó al pueblo salvadoreño, a la sociedad civil organizada y a los institutos políticos en

aras del bien común y de la paz social, a apoyar el esfuerzo de la referida comisión.

Otro asunto de interés público que cobró importancia durante el mes de mayo fue el de la gestión del medio ambiente y de riesgos, del que se apuntan algunas líneas a continuación. El día 3, por ejemplo, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) informó que las predicciones alarmistas hechas anteriormente sobre la intensidad del invierno de 2006 ya comenzaban a bajar de tono, debido a que el fenómeno llamado “La Niña” se estaba debilitando, “lo que a medio año reduciría la cantidad de lluvias”, según la directora de la institución, Elda de Godoy. Por ello, se prevé que la intensidad y cantidad de lluvias del período invernal sean menores que en 2005, esperando únicamente 11 sistemas meteorológicos en el Pacífico, es decir, 4 menos que el año anterior. Sin embargo, el pronóstico para la costa atlántica se mantiene, pues se esperan alrededor de 17 sistemas que podrían convertirse en huracanes y, eventualmente, afectar el territorio salvadoreño.

Por otro lado, el 5, la organización “Unión Mundial para la Naturaleza”, que busca asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales, ubicó a El Salvador en la “lista roja” de países con especies de animales y plantas en peligro de extinción, subiendo en dos años de 49 a 59 especies en peligro, el salto más grande en toda la región. Seguidamente, el 12, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio a conocer un informe en el que se diagnosticó la calidad del aire, en especial en el gran San Salvador, donde el principal contaminante proviene del transporte terrestre, con 51 por ciento. Esto repercute, por ejemplo, en gastos en el sistema de salud, pues crece la atención de enfermedades respiratorias. “A partir de este estudio esperamos hacer un plan estratégico para trabajar la calidad del aire a mediano y a largo plazo en coordinación con las entidades respectivas”, dijo el ministro del ramo, Hugo Barrera.

Finalmente, hay que retomar el tema de la violencia social, que en mayo siguió ocu-

pando a la opinión pública nacional. Así, el día 4, la Policía Nacional Civil informó que durante los primeros cuatro meses de 2006 se registraron 55 asesinatos más que en el mismo período del año anterior. El promedio diario de homicidios ascendió a 9 en el período en cuestión. No obstante, un informe periodístico de *La Prensa Gráfica* afirmaba que “la mayoría de los delitos cometidos en El Salvador nunca son informados a las autoridades o quedan engavetados sin que se haga algo al respecto”, dejando margen al hecho de que las cifras manejadas por las autoridades subestimen el total de los casos de homicidios registrados en el país.

Ese mismo día, se dio a conocer entre un público restringido el contenido de una carta enviada el pasado 25 de abril desde Amnistía Internacional, en la que se solicita al presidente Elías Antonio Saca reformar la denominada Comisión Interinstitucional, para que se incluyan organismos no gubernamentales en la búsqueda de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado. Además, el remitente de Amnistía Internacional le sugiere al mandatario que el día 2 de junio se declare “Día nacional de la niñez desaparecida durante el conflicto armado”. La misiva pasó desapercibida en los grandes medios de comunicación y de las comunicaciones de Casa Presidencial.

El 13, la Universidad de El Salvador, a través de un comunicado, hizo un llamado al poder económico y político del país sobre la situación de violencia social de la cual fue víctima José Efraín Flores, estudiante de la UES, el pasado 3 de mayo, para que no se derroche dinero en campañas publicitarias. “A más educación, menos violencia, a más justicia, menos violencia, a más fuente de trabajo, menos violencia, a menos corrupción, menos violencia, reza parte del comunicado”. Además, la fuente hace énfasis en señalar que con el dinero que se gasta en la desmedida propaganda gubernamental y con la eliminación de tanta corrupción, se podría invertir en mejorar la educación, incrementar fuentes de trabajo y mejorar los servicios de salud y de vivienda. El día 17, el presidente

Saca anunció un refuerzo al presupuesto asignado a la PNC, mismo que asciende a 14 millones de dólares. Según el Ejecutivo, ese refuerzo se destinaría al fortalecimiento del laboratorio científico, unidades y equipos de investigación policial.

El 24, la investigadora de El Salvador por Amnistía Internacional (AI), Dina Coloma, denunció desde Londres, Inglaterra, que el Estado salvadoreño ha mostrado falta de interés en administrar justicia contra las “espe-luznantes” violaciones a los derechos humanos, por no responder a los llamados del organismo desde, “por lo menos, la administración Flores”. El presidente Antonio Saca dijo no conocer el informe, pero aclaró que su gobierno estaba luchando con todas las armas legales para perseguir a los homicidas. Sin embargo, en una de las cartas, enviada el 25 de noviembre del año pasado, AI señala “la falta de disposición de las autoridades para investigar minuciosamente los casos de asesinatos de mujeres y el trato que reciben los familiares de las víctimas al presentar sus denuncias”. La realidad da la razón a Amnistía Internacional y no el discurso mediático gubernamental. Sin duda, la solución que propone el editorialista de *El Diario de Hoy*, en su edición del 24 de mayo, no es ni la más viable ni la más inteligente. Al ejemplificar lo sucedido en países anglosajones de siglos pasados, el editorialista propone para El Salvador: “criminal que no era ahorcado se enviaba a lejanas colonias, a las antípodas como Australia, donde la dura realidad les hizo crear una nación pacífica”.

La situación de violencia social se sostendría durante junio. El primer día del mes, autoridades policiales reportaron 297 homicidios a lo largo del mes de mayo, resaltando una la disminución con respecto al mismo período en 2005, cuando la cifra ascendió a 313. Sin embargo, al realizar un balance tomando en cuenta los primeros cinco meses del año en curso, las cifras de homicidios son las siguientes: entre enero y mayo de 2005 se cometieron 1 401 homicidios; mientras en el mismo periodo de 2006 la cifra llegó a 1 440, es decir, 39 más. Los datos

hablan del fracaso de los planes gubernamentales orientados a disminuir los homicidios cometidos en El Salvador.

En la opinión pública, no han faltado las voces que relacionan el hecho de la portación de armas de fuego con el alto índice de homicidios registrados en el país. Sobre esta tesis, el día 26 de mayo, se dieron a conocer las cifras de la legalización de portación de armas. De acuerdo con los registros, se han matricularon 2 835 armas de fuego desde enero hasta la fecha, elevando a un total de 202 593 las armas registradas, cuando en el año 2000 la cantidad era de 142 940. Es decir, 59 653 nuevas armas circulan por el país, sin considerar la incontable cantidad de armas ilegales. Una investigación de *La Prensa Gráfica*, publicada ese mismo día, ofrece el dato siguiente: “el 52.71% de las armas registradas por la Fuerza Armada hasta junio de este año tiene su permiso vencido”. Esto demuestra, por un lado, la falta de control de parte de las autoridades correspondientes en torno a la portación legal de armas de fuego; por otro, es una muestra de la desidia de los salvadoreños en actualizar la situación legal de las armas que portan. Los datos de prensa revelan que de los homicidios que se cometen diariamente, en el 80 por ciento ha habido de por medio armas de fuego.

Otra situación que está muy relacionada con la violencia es la exposición a imágenes televisivas amarillistas. El 26, Jorge Hernández, vicepresidente de los noticieros de Telecorporación Salvadoreña (TCS), reconoció, en una entrevista realizada por *La Prensa Gráfica*, que la televisión y la manera de presentación de notas periodísticas influye en esta situación generalizada de violencia social, “nos dimos cuenta, en buena medida con las conversaciones con la policía, que la publicación de algunas imágenes se habían convertido en una especie de trofeo para quienes asesinan”, dijo Hernández. Las imágenes de cadáveres se han eliminado de los noticieros de la mencionada empresa televisiva, según anunció. La relación entre la violencia social y los noticieros amarillistas de la referida

cadena se daba por el abuso de imágenes de los cuerpos de las víctimas.

También hay que apuntar algunas líneas en torno a la situación de vulnerabilidad física y social de cientos de salvadoreños ante la entrada de la estación lluviosa durante mayo y junio. Así, el día 8, un trabajador murió y otros dos resultaron heridos a raíz de un alud de tierra en la quebrada La Lechuza, en San Salvador, sitio donde el Ministerio de Obras Públicas realiza la reconstrucción de bóvedas para evitar inundaciones en esa zona. Las fuertes lluvias que se presentaron en estos días, levantó la polémica del por qué las autoridades correspondientes esperaron el inicio del invierno para comenzar con las obras de mitigación.

Entre los días 18 y 20, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) informó sobre un fenómeno climático que afectó a los habitantes de la costa del país, “el incremento del oleaje presentado desde ayer domingo (18), fue confirmado por los pobladores de las áreas costeras del occidente y el centro del territorio nacional. Se prevé que este oleaje se mantendrá durante todo este día hasta el día martes 20, cuando comience a mejorar de forma gradual. Este tipo de oleaje provoca corrientes de resaca que pueden arrastrar a personas u objetos expuestos. Este día se espera una altura de las olas entre los 3.05 a 3.66 metros en horas de la tarde y noche para la zona occidental y zona central del país”. Según el mismo informe, dicho fenómeno se debió al inicio del invierno en Nueva Zelanda, al sur de Australia, lo que provocó fuertes vientos que repercutieron en las costas de Centroamérica, con olas fuera de lo normal. El día 20, la altura de las olas volvió a la normalidad, no sin antes dejar a muchas viviendas, negocios y ranchos, cercanos a la costa, con daños severos.

Finalizando en lo social, el segundo día de junio, el presidente Saca fue el único que habla hispana que tuvo espacio en el púlpito de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el VIH-SIDA, en la que pidió, entre otras cosas, más

fondos internacionales para combatir dicha enfermedad. Además aseguró que la sociedad civil en El Salvador ha tenido un marcado protagonismo en la lucha contra el VIH-SIDA y su tratamiento. En el país, días atrás, los hospitales no contaban con medicina para pacientes portadores del VIH. Por otro lado la misión cubana ante la ONU denunció que Estados Unidos le negó la visa al ministro de Salud de Cuba con la intención de “ocultar la experiencia cubana en la lucha contra esa pandemia”. En el país caribeño, los avances en materia de medicina superan con creces a la región latinoamericana.

Economía

En lo concerniente a la dinámica económica, durante el mes de mayo, hubo dos temas relevantes que ocuparon a la opinión pública nacional: el rechazo de una tímida reforma fiscal por parte de los grandes empresarios salvadoreños y las intenciones del gobierno de El Salvador de firmar, junto con el resto de países de la región centroamericana, un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). El 12, se realizó en Viena, Austria, la cumbre entre la UE y los países de América Latina y el Caribe. Resalta de esta un acuerdo para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) de Europa con Centroamérica, no sin antes dejar claras algunas condiciones, como la unificación de aduanas centroamericanas y, quizá la más difícil de acatar, la firma de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte de El Salvador, único en la región que se ha mantenido reacio a firmarlos. Según el presidente Antonio Saca, el contenido de dichos convenios contradice la Constitución. Pero lo cierto es que no es más que un pretexto, pues los convenios van en contra de los intereses de las grandes empresas, que en este país tienen vía libre para imponer sus reglas al amparo del Estado. Basta darle un vistazo a la situación de las maquilas para ejemplificar esto.

Finalmente, el 18 de mayo, altos funcionarios de la empresa privada y del sector bancario del país rechazaron la reforma fiscal

impulsada por el gobierno de Saca por atender, según ellos, contra un “sistema rígido de libertades”. Tras haberse modificado gran parte del texto original, 87 por ciento según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), las reformas fiscales conservaron algunos puntos como el secreto bancario, que siguieron incomodando al sector privado. Hay que decir que, a mediados de octubre de 2004, Saca se había reunido con un selecto grupo empresarial para darles a conocer en detalle los puntos que contemplaría la reforma fiscal. “Como ustedes quieran. Elijan: esta reforma o la reforma fiscal del FMLN”, sentenció el presidente, según contó un funcionario de Casa Presidencial. Desde el FMLN, los cambios fueron calificados como “cosméticos”. La molestia cobró su factura al principal impulsor de la reforma fiscal, el ex ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, quien misteriosamente salió de la cartera de Estado.

En junio, hay que retomar la discusión en torno al aumento de los precios de la electricidad, que enfrentó a la oposición legislativa con la cúpula empresarial salvadoreña. Así, el día 7, ANEP adversó la propuesta de algunos diputados de oposición que consistía en congelar los precios de la energía eléctrica para evitar la inminente alza anunciada días antes. El razonamiento de los empresarios es que dicha medida alejaría a los inversionistas, pues al congelar dicho servicio se abrirían las puertas a que suceda lo mismo con otros. Tres días después, el 10, se hizo efectivo el aumento a la tarifa de energía eléctrica en un 14 por ciento, según lo anunció la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Vale recordar que es el tercer aumento que permite el gobierno de Antonio Saca. El primero fue de 3 por ciento, en el año 2004, y el segundo fue de 5.5 por ciento, en el 2005. El alza total a la fecha es de 22.5 por ciento. La justificación de esta alza se debe a los precios del petróleo, según el gobierno. Tanto para Jorge Nieto, superintendente de electricidad, como para Saca, se trata de algo que el gobierno no puede controlar. Para ejecutivos

de la ANEP, el sector más vulnerable ante esta medida será la industria. Pero, en realidad, la más afectada será la población en general. Esto significó el comienzo de una serie de aumentos en todos los servicios básicos y productos en general. Por ejemplo, el día 13, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) anunció un incremento del 3.5 por ciento en los precios de bienes y servicios.

Luego se anunció, diez días antes de la finalización del subsidio para el transporte público, la inminente alza a la tarifa del pasaje del servicio de transporte público. David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas, dijo que “reconocemos, y hay que sincerarse en el tema del transporte, que los costos les han aumentado a los transportistas”. La Coordinadora Nacional del Transporte había solicitado al MOP, el 28 de mayo pasado, que, a raíz de la finalización del subsidio para el transporte público, se incrementara a 0.30 centavos de dólar el pasaje urbano y un 20 por ciento al pasaje interdepartamental. El 29, luego de las negociaciones entre transportistas y el gobierno, este último fijó las nuevas tarifas. El pasaje urbano subió 0.25 centavos de dólar y en el interdepartamental el aumento fue de 20 por ciento para tarifas menores de 1.50 de dólar y para aquellas que superen esta, fue del 15 por ciento. El anuncio estuvo a cargo de Gutiérrez. El escenario es desalentador, ante el aumento de precio de muchos productos y servicios. En definitiva, el costo de la vida ha aumentado en junio de una manera escandalosa, mientras los salarios se mantienen congelados.

Otra situación que afectó a la población, en especial a la del oriente del país, ocurrió el día 26. La compañía atunera española, Grupo Calvo, despidió a 600 trabajadores, la mayoría mujeres, de su planta atunera ubicada en el departamento de La Unión. Calvo se beneficia del Sistema Generalizados de Preferencias arancelarias, SGP Plus, que otorgó la Unión Europea a El Salvador. Se trata de un mecanismo mediante el cual la empresa puede exportar lomos de atún a la Unión Europea, libre de impuestos, temporalmente, mientras el gobierno salvadoreño

se comprometía a ratificar los convenios de la OIT aludidos líneas arriba. Dicho mecanismo termina el próximo 31 de diciembre y el gobierno tuvo que haber introducido reformas a la Constitución durante la legislatura anterior para que la nueva Asamblea, a partir del 1° de mayo, ratificara los convenios de la OIT con respecto a la libertad sindical y contratos colectivos. El gobierno no hizo los trámites pertinentes, poniendo en peligro la permanencia del país en el SGP Plus, razón por la que Calvo tendría que pagar un 20.5 por ciento de aranceles para exportar a Europa, a partir de 1 de enero de 2007. En sus discursos, el presidente Saca habla del libre mercado, de favorecer la inversión, de crear seguridad para que vengan empresas a invertir y, sin embargo, su tardanza en suscribir los referidos convenios lo ha hecho entrar en contradicción con su discurso. “Calvo no es el que ha tomado la decisión (de los despidos). Ha sido indirectamente obligado”, expresó el principal ejecutivo de dicha empresa en el país, Ramón Calvo, para responsabilizar al gobierno. Además, aseguró que el TLC con Estados Unidos no les favorece por la evidente razón de que su mercado está en Europa; “no estamos en el mercado americano”, acotó.

Ese mismo día, la Comisión Especial para la Política Fiscal (CEPF) informó que una reforma estructural al sistema de pensiones, privatizado en 1998, es necesaria: “si no hay medidas, en tres o cuatro años habría una crisis fiscal que pondría en peligro no solo el sistema de pensiones, sino todo el sistema en general”, afirmó Ricardo Perdomo, miembro de la CEPF. Nuevamente este tipo de situaciones cuestiona la efectividad y las “bondades” de las privatizaciones.

En definitiva, estos dos meses estuvieron marcados por una permanente crisis social, económica y política. El promedio de asesinatos aumentó; el costo de la vida sigue en alza y la polarización política estuvo a la orden del día. Con ello, el rumbo del país no es alentador, especialmente para quienes no cuentan con los recursos necesarios para una vida digna, o sea, la mayoría de salvadoreños.

El gobierno continuó, como lo ha hecho desde su inicio, con una millonaria propaganda mediática, en lugar de tomar las medidas necesarias para palear esta crisis generalizada. Los discursos fueron, uno a uno, desmen-

tidos por la realidad de pobreza y empobrecimiento de las mayorías. De continuar esta situación, el país estará cada vez más lejos de constituirse en una sociedad justa, democrática y en paz.